

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

<b>PROCESO</b>	ORDINARIO
<b>DEMANDANTE</b>	Alberto Valencia Cardona
<b>DEMANDADO</b>	Colpensiones
<b>PROCEDENCIA</b>	Juzgado Laboral del Cto. De Envigado
<b>RADICADO</b>	05266 3105 <b>001 2020 00249</b> 01
<b>INSTANCIA</b>	SEGUNDA
<b>PROVIDENCIA</b>	SENTENCIA Nro. 176 de 2022
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	Incrementos pensionales
<b>DECISIÓN</b>	Confirma absolución

En la fecha, **veinticinco (25) de agosto de dos mil vientidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento en el grado jurisdiccional de Consulta, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado Antioquia, dentro del proceso ordinario promovido por **Alberto Valencia Cardona** en contra de **Colpensiones**, radicado único nacional 05266 3105 **001 2020 00249** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 26**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

**Antecedentes**

El demandante convocó a juicio a la entidad accionada pretendiendo el reconocimiento y pago de incremento pensional por tener económicamente

a cargo a su cónyuge **Olga de Jesús Castañeda López**, efectivo a partir del otorgamiento de la prestación, y las costas procesales.

En sustento de ello se afirma que mediante Resolución GNR 109788 del 10 de abril de 2015 Colpensiones le otorgó pensión de vejez; que, en virtud de lo anterior, el 06 de octubre de 2019 petitionó a la accionada el otorgamiento del incremento pensional por su cónyuge a cargo, negado el 9 de diciembre del mismo año. Agrega que la señora Olga de Jesús es ama de casa, quien no posee ningún bien mueble o inmueble ni recibe auxilios económicos del Estado, dependiendo de un todo del pensionado.

Una vez admitida la demanda a través de auto del 7 de septiembre de 2020, **debidamente notificada Colpensiones, dentro del término para ello** allegó pronunciamiento, manifestando frente a los hechos aceptar el contenido del acto administrativo que reconoció la pensión de vejez y la norma aplicada, así como ser cierta la reclamación administrativa del incremento pretendido, precisando que el mismo se negó atendiendo a que, desde el 28 de marzo de 2019, con la sentencia de unificación SU-140 de 2019, la Corte Constitucional cambió radicalmente la línea jurisprudencial fijada en la materia y dictaminó que los incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, fueron objeto de derogatoria orgánica a partir de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, es decir, desde el 1 de abril de 1994, pues la misma Corte afirmó que, como resultado de tal derogatoria, solo tendrían derecho a estos incrementos aquellos que hubieren cumplido los requisitos para pensionarse antes del 1 de abril de 1994 y, para estos efectos, no sería aplicable el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones de mérito** que denominó: falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación pretendida, cobro de

lo no debido, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

En la audiencia, el juez de la causa, puso fin a la primera instancia con sentencia proferida el **25 de julio de 2022**, en la que se **absolvió a Colpensiones** de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante, sin imponer cosas, ordenando el grado jurisdiccional de consulta.

Argumentó el fallador que en sentencia SU 140 de 2019 la Corte Constitucional explica que con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones los incrementos pensionales desaparecieron del ordenamiento jurídico, aplicando estos solo a prestaciones consolidadas antes de la Ley 100 de 1993, que no es el caso, siendo esta decisión de obligatorio acatamiento por unificar jurisprudencia sobre el tema.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **la apoderada judicial de Colpensiones**, quien solicitó confirmar la decisión por cuanto la Corte Constitucional en providencia de unificación SU140 del año 2019, precisó que los incrementos fueron derogados por la ley 100 de 1993, a partir de su entrada en vigencia el 1 de abril de 1994. En esa medida ha de entenderse que tal derogatoria aplica incluso para los beneficiarios del régimen de transición, siendo posible su reconocimiento solo y exclusivamente cuando el reconocimiento pensional se circunscribe a las disposiciones del Decreto 758 de 1990, pues en los demás casos en que se dé el reconocimiento de pensión bajo los preceptos normativos posteriores a la ley 100 de 1993, habrá de entenderse que el beneficio de los incrementos quedó derogado, y por tanto no aplica su reconocimiento por ninguna vía. En conclusión, solo serían procedentes, cuando el pensionado acredite haber sido pensionado directamente en aplicación al

decreto 758 de 1990 y no a las personas que se les aplique el régimen de transición, no siendo el caso del demandante.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados en los autos se tienen: la fecha de nacimiento del demandante el **21 de septiembre de 1954**; que contrajo matrimonio con la señora Olga de Jesús Castañeda López, según consta en el registro civil de matrimonio que reposa en el archivo 01 Demanda págs 21-22; y el otorgamiento de pensión de vejez al señor Cardona Valencia por parte de Colpensiones, con acto administrativo GNR 109788 del 10 de abril de 2015, en cuantía del mínimo legal causada a partir del 2 de octubre de 2014, obrante en el archivo 01 páginas 10 a 15; que el actor reclamó incrementos pensionales por su cónyuge a cargo, petición que fue negada por la entidad demandada, argumentando no se encontraban vigentes desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993<sup>1</sup>

Pues bien, en lo atinente a **los incrementos pensionales**, establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, debe decirse que si bien esta sala de decisión, atendiendo los criterios jurisprudenciales del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, así como los de la Corte Constitucional, venía sosteniendo que al haber guardado silencio la Ley 100 de 1993 con relación a estos, se aplicaban para los beneficiarios del régimen de transición, puesto que los mismos no dependían de que la pensión de vejez se reconociera o no en vigencia de la última norma, luego de efectuarse un nuevo análisis sobre el tema bajo los lineamientos establecidos en la sentencia **T-456 de 2018** y **SU 140 de 2019** y en aras no solo de los principios de igualdad y seguridad jurídica,

---

<sup>1</sup> Archivo 01 Demanda págs 16-18

sino de acatamiento del precedente constitucional el cual según lo establecido en la sentencias SU 298 de 2015 y T – 109 de 2019, tiene carácter ***vinculante***, no solo en forma vertical (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte, y se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, al tenerse en cuenta el principio de supremacía constitucional y la importancia que tienen las decisiones sobre la interpretación y alcance de los preceptos constitucionales, destacando seguidamente la Corporación la relevancia de la obligatoriedad de las sentencias de unificación cuando son proferidas por la Corte Constitucional, precisando que: *la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los pronunciamientos realizados en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, **aun cuando sean altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones***". A su vez, "**en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) [...], basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que [...] unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos**" (Subrayado y negrillas fuera del texto).

Tesis acogida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como se puede apreciar en la sentencia SL2061 de 2021, en la cual expuso: "*En relación con los incrementos pensionales por personas a cargo de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, basta decir que esa norma fue objeto de derogación orgánica, en virtud de la expedición de la Ley 100 de 1993 y resulta incompatible con el artículo 48 de la CN, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia SU-140-2019.*" (reiterada en providencias SL4276, SL3977 y SL5213 del año 2021 entre otras,).

Por lo anterior es improcedente **tal beneficio cuando el afiliado adquiere el derecho pensional con posterioridad a la expedición**

**de la Ley 100 de 1993**, así se reconozca bajo los postulados del régimen de transición en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, en tanto, los mismos, según lo expresado en la sentencia SU 140 de 2019 fueron orgánicamente derogados por la referida ley, al haber regulado esta de manera íntegra y exhaustiva lo relativo a las pensiones, disponiendo la ultractividad solo de unos determinados aspectos del sistema pensional anterior, para ciertas personas y por cierto tiempo, protegiendo las expectativas legítimas de tales afiliados, beneficios estos referidos exclusivamente a la adquisición del **derecho a la pensión**. Así, la garantía del artículo 36 de la Ley 100, solo contempla tres bondades específicas " *i) la edad para consolidar el derecho a la pensión de vejez, ii) el tiempo de servicio -o número de semanas cotizadas-, y iii) el monto de esa prestación*", sin que el incremento pensional sea constitutivo del monto, y sin extenderse algún derecho extra pensional accesorio de dicha pensión, máxime cuando los incrementos que prevé el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no fueron dotados de una naturaleza pensional por expresa disposición del artículo 22.

Así las cosas, al determinarse que el beneficio del aumento en la mesada pensional del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año fue orgánicamente derogado con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones regulado en la Ley 100 de 1993, y no hace parte del régimen de transición, el cual solo salvaguardó del régimen anterior lo atinente a la edad, monto y semanas, y sin que dicha prerrogativa constituya un derecho adquirido conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto, ni los consagró ni hizo mención a ellos, **no es dable su aplicación si no para los casos en los que el derecho se consolidó en vigencia de los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, esto es, antes del 1º de abril de 1994, lo que aquí no aconteció**, pues la prestación se causó **a partir del 2 de octubre de 2014**, según el contenido de la Resolución GNR109788 de 2015, por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concordado con el Acuerdo 049 de 1990, es decir, estando en vigencia el Sistema General de

Pensiones contenido en la referida Ley, por lo que se impone **confirmar** la decisión revisada.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado dentro del proceso ordinario promovido por **Alberto Cardona Valencia** en contra de **Colpensiones**.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijará por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL  
Magistrada

  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA  
Magistrado